

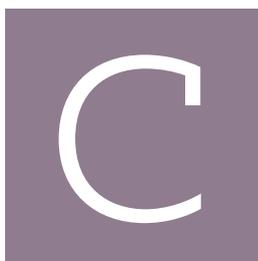
Pobreza e inseguridad en un contexto urbano



CÉSAR VELÁZQUEZ GUADARRAMA

Doctor en Políticas Públicas por The University of Chicago, con Maestría en Economía por El Colegio de México y licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Sus principales áreas de investigación son finanzas públicas estatales y municipales, economía política y competencia. Cuenta con muy diversas publicaciones tanto académicas como de divulgación. Ha colaborado para organismos del gobierno federal e internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su capítulo para México (PNUD) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Actualmente es académico de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

I



uando se discute sobre la pobreza, sobre su medición o su abatimiento, se suele pensar que los factores más relevantes para su presencia son la desigualdad, el ingreso, la educación, la salud y el acceso de servicios públicos

básicos. Sin embargo, en sociedades como la mexicana en la que la inseguridad es un problema grave, ésta también tiene un papel determinante en el bienestar de las personas.

La inseguridad es un elemento que está presente en el andar diario de los mexicanos y más en el ámbito urbano. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización 2021 (ENVIPE), el 58.9% de la población de 18 años y más manifiesta como su principal preocupación el tema de la inseguridad y la delincuencia, y el 65.5% de la misma se siente inseguro en su municipio. En el ámbito urbano en 2020, de acuerdo con la misma encuesta, se estimaron 35.2 miles de delitos y 26.8 miles de víctimas por cada 100,000 habitantes (15.1 mil y 12.4 mil en el ámbito rural respectivamente). Es decir, uno de cada 4 habitantes de zonas urbanas fue víctima de un crimen. Para poner en contexto el problema de la seguridad en el país, basta señalar

que México presentó en el año 2018 una tasa de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes mientras que esa misma tasa fue de 4.9, 5.3 y 0.62 para los Estados Unidos, Argentina y España, respectivamente¹.

Así, el objetivo de este breve ensayo es mostrar los principales mecanismos por medio de los cuales el crimen puede incidir en mayores niveles de pobreza.

II

Menor crecimiento económico

El crimen inhibe el crecimiento de la economía a través de una menor inversión física, una menor productividad y horas de trabajo, así como de una distorsión en la asignación de los recursos. El bajo crecimiento económico implica menores oportunidades para disminuir la pobreza. Para el caso de México, Enamorado, López-Calva y Rodríguez-Castelán (2014) muestran para el período 1990-2010 que los homicidios relacionados con el narcotráfico redujeron el crecimiento económico de los municipios mexicanos. De igual forma, Robles, Calderón y Magaloni (2013) encontraron que un incremento de un homicidio relacionado con el narcotráfico disminuye la proporción de personas que trabajan y el ingreso laboral y aumenta la tasa de desempleo.



Fotografía: @pexels.com

Para poner en contexto el problema de la seguridad en el país, basta señalar que México presentó en el año 2018 una tasa de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes mientras que esa misma tasa fue de 4.9, 5.3 y 0.62 para los Estados Unidos, Argentina y España, respectivamente.

Desarrollo del capital humano

La delincuencia y la inseguridad afectan negativamente el desarrollo del capital humano, elemento necesario para la movilidad social. Diversas investigaciones han señalado que el aprovechamiento escolar puede verse perjudicado por el estrés emocional que causa la inseguridad, así como por una menor asistencia escolar ocasionada por el hecho de que las familias están menos dispuestas a mandar a sus hijos a la escuela si consideran que pueden ser víctimas de un delito o de una situación de peligro. El menor aprovechamiento

y el ausentismo escolar en las etapas iniciales de la educación pueden incidir en un abandono de la escuela en etapas posteriores (Caudillo, M. y F. Torche, 2014). Al afectar el desarrollo del capital humano, el crimen presenta costos no sólo en el corto, sino también en el largo plazo.

Crimen como efecto distributivo regresivo

El ser víctima de un delito implica la pérdida de activos². Esto es cierto para todos los grupos sociales, pero para la población de bajos ingresos los efectos nega-



Fotografía: @pexels.com

El crimen inhibe el crecimiento de la economía a través de una menor inversión física, una menor productividad y horas de trabajo, así como de una distorsión en la asignación de los recursos. El menor crecimiento económico implica menores oportunidades para disminuir la pobreza.

tivos de esta pérdida pueden ser mayores que para la población de altos ingresos. En primer lugar, los activos perdidos pueden representar una parte muy importante del total de los mismos. En segundo lugar, estos activos en muchas ocasiones son esenciales para la generación de sus ingresos, lo cual implica que el ser víctima no sólo trae consigo la privación de un bien, sino la pérdida de ingresos futuros. En tercer lugar, para este grupo poblacional no es fácil recuperar sus bienes pues no cuentan con mecanismos de protección como ahorros o seguros y sacrificar aún más su consumo en el corto plazo muchas veces no es una opción posible (Ibáñez y Moya, 2010; Carter y Barrett, 2006). Lo anterior es importante, pues la literatura ha señalado que la acumulación de activos

es un elemento esencial para la generación constante de ingresos que permitan salir de una situación de pobreza. Además, determinados activos también sirven como un seguro ante choques negativos en el ingreso, por lo que su pérdida deja a las personas sin aseguramiento.

Por otro lado, ante olas de crimen o períodos de incrementos sustanciales en el mismo, las personas de bajos ingresos suelen presentar mayores tasas de victimización. La explicación es que los grupos poblacionales de ingresos más altos pueden utilizar mayores recursos para reducir su exposición a actos criminales como compra de alarmas, uso de viviendas con mayor seguridad, cambio de lugar de residencia o uso de protección privada personal (Di Tella *et al.*,

2010)³. En este sentido, la violencia tiene un efecto distributivo regresivo. Por ejemplo, Ajzenman, Galiani y Seira (2015) muestran que en México un incremento de los homicidios está asociado a una caída en el precio de las viviendas de bajo costo, pero no a los precios en las zonas residenciales.

III

La relación entre pobreza y crimen, sobre todo en el contexto urbano, es un fenómeno complejo que debe

ser analizado e investigado y cuyo entendimiento es esencial para la implementación de políticas públicas que incidan en menores tasas tanto de pobreza como de delitos. En este contexto, es importante considerar que las políticas públicas contra el crimen deben tomar en cuenta lo local, es decir las características propias de cada ciudad o zona metropolitana y su contexto urbano. El tipo de transporte público, la movilidad, el uso de suelo de las diferentes zonas de la ciudad, la segregación y la gentrificación son factores que deben ser considerados⁴.

¹ Datos obtenidos del Banco Mundial. <https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5>

² La ENVIPE 2021 estima que en el año 2020 las pérdidas por victimización ascendieron a 185,000 millones de pesos, equivalente al 1.2% del PIB.

³ No en todo tipo de contextos o para todo tipo de delito la tasa de victimización es mayor para las personas de bajos ingresos. Véase Gaviria y Pages (2002).

⁴ Véase Hipp (2007), para un ejemplo de la importancia del contexto urbano para el análisis del crimen.

Bibliografía

Ajzenman, N., S. Galiani, y E. Seira, 2015, "On the Distributive Cost of Drug-related Homicides", *Journal of Law and Economics*, vol. 58, N° 4, pp. 779-803.

Carter, M. y C. Barrett, 2006, "The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset based approach", *Journal of Development Studies*, vol. 42, N° 2, pp. 178-199.

Caudillo, M y F. Torche, 2014, "Exposure to local homicides and early educational achievement in Mexico", *Sociology of Education*, vol. 82, N° 2, pp. 89-105.

Di Tella, Rafael, S. Galiani y E. Schargrodsky, 2010, "Crime Distribution and Victim Behavior during a Crime Wave", in Di Tella y Edwards (editors) *The Economics of crime. Lessons for Latin America*, National Bureau of Economic research, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 175-204.

Enamorado, T., López-Calva, L. F., Rodríguez-Castelán, C. and Winkler, H., 2016, "Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war", *Journal of Development Economics*, vol. 120, pp. 128-143.

Gaviria, A. y C. Pages, 2002, "Pattern of crime victimization in Latin American cities", *Journal of Development Economics*, vol. 67, N° 1, pp. 181-203.

Hipp, J. R., 2007, "Block, tract, and levels of aggregation: neighborhood structure and crime and disorder as a case in point", *American Sociological Review*, vol. 72, USA, SAGE Journals.

Ibáñez, Ana y A. Moya, 2010, "Do conflicts create poverty traps? Asset Losses and Recovery for displaced households in Colombia", in Di Tella y Edwards (editores), *The Economics of crime. Lessons for Latin America*, National Bureau of Economic research, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 137-172.

Robles, G., G. Calderón, y B. Magaloni, 2013, *Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México*, BID Working Paper 426, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.